



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0086/2017

FECHA: 20 de junio de 2017

**ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**

En respuesta a la Reclamación número RT/0086/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado el 19 de enero de 2017 en la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, la ahora reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- solicita información relacionada con "*conocer la Oferta de Empleo Público a la que está vinculada mi puesto*".

Mediante Resolución de 2 de marzo de 2017 de la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería de referencia se resuelve conceder la información solicitada y, en consecuencia, se traslada a la interesada que "Según los datos obrantes en esta Consejería, el puesto de trabajo 61887, que usted ocupa en la actualidad como funcionaria interina, se encuentra vinculado a la Oferta de Empleo Público del año 2007". Añadiendo en el considerando segundo que "sin perjuicio de lo indicado [...] la Dirección General de la Función Pública procede a publicar, con carácter previo a la ejecución de los correspondientes procesos selectivos, los puestos de trabajo que se encuentran vinculados a los mismos".

Frente a esta Resolución, por escrito registrado en esta Institución el 13 de marzo de 2017, la interesada interpone una reclamación al amparo del artículo

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



24 de la LTAIBG. En concreto, argumenta que la información recibida “es imposible puesto que llevo trabajando en el mismo puesto desde Enero de 2006. Me presenté al examen de la oposición en 2005. Por lo tanto mi OPE creo que es del año anterior. Es decir, del 2004, como mucho 2005”.

2. El 14 de marzo, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Secretario General Técnico de la citada Consejería registrado en esta Institución el 7 de abril de 2017 se traslada escrito de alegaciones elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de la misma Consejería en el que, en síntesis, se señala lo siguiente:

de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de referencia, se traslada escrito de alegaciones en el que se pone de manifiesto lo siguiente:

- *Con fecha 2 de marzo de 2017, se dicta resolución en la que se reconoce el derecho de acceso a la información pública y se facilita a la interesada la información solicitada. Según se indica en la resolución, “de acuerdo con los datos obrantes en esta Consejería, el puesto de trabajo 61887, que usted ocupa en la actualidad como funcionaria interina, se encuentra vinculado a la Oferta de Empleo Público del año 2007”.*
- *Para obtener dicha información se ha consultado la aplicación informática SIRIUS (Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos), herramienta puesta a disposición de todas las unidades de gestión de personal de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a la que corresponde su administración y mantenimiento en coordinación con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.*
- *La Oferta de Empleo Público (OPE) es un instrumento de la Administración, previsto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público para la planificación y provisión de sus necesidades de recursos humanos. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, corresponde a la Dirección General de la Función Pública la programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal, así como la elaboración de la Oferta de Empleo Público*



*Regional y la convocatoria y gestión de los procesos selectivos para el ingreso como funcionario de carrera y personal laboral fijo.*

- *Como instrumento de la política de personal de la Administración, la Oferta de Empleo Público está condicionada, entre otros factores, por las cambiantes necesidades del servicio, lo que en ocasiones puede determinar que los puestos de trabajo a los que la Oferta afecta sufran variaciones.*
- *La información facilitada a la interesada en respuesta a su solicitud es correcta y se corresponde con los datos obrantes en el Sistema Información de Gestión de Recursos Humanos de puestos adscritos a esta Dirección General, que señala la vinculación actual del puesto de trabajo 61887 a la Oferta de Empleo Público del año 2007. Finalmente, indicar, que según los registros de la citada aplicación, el puesto estuvo anteriormente vinculado a la Oferta de Empleo Público del año 2006.*

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto “*salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley*”. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*



En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Según se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*.

A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la *“información pública”*, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la *“información pública”* como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Partiendo de esta premisa, en cuanto respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la LTAIBG dedica los Capítulos III y IV del Título I -artículos 12 a 24- a regular el objeto del derecho, el procedimiento administrativo para su ejercicio y la garantía jurídica de su cumplimiento.

4. En el presente caso, la interesada ha planteado su Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar que la información suministrada por la administración autonómica no satisface su solicitud. Mientras que, por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, ha trasladado a aquélla, tanto en la resolución recurrida ante esta Institución como en las alegaciones remitidas a este Consejo como consecuencia de instar este procedimiento, que *“la información facilitada [...] se corresponde con los datos obrantes en el Sistema Información de Gestión de Recursos Humanos de puestos adscritos a esta Dirección General, que señala la vinculación actual del puesto de trabajo 61887 a la Oferta de Empleo Público del año 2007”*, y, asimismo, que *“según los registros de la citada aplicación, el puesto estuvo anteriormente vinculado a la Oferta de Empleo Público del año 2006”*.

Desde esta perspectiva, tal y como ha argumentado la administración autonómica, la información facilitada a la ahora reclamante se ha obtenido de la aplicación informática SIRIUS (Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos),



configurada como una herramienta puesta a disposición de todas las unidades de gestión de personal de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. De manera que, puede deducirse razonablemente, dicha aplicación informática se alimenta, entre otros elementos, con la información generada como consecuencia de la aprobación de la correspondiente Oferta de Empleo Público, motivo por el que la solicitud de información formulada puede entenderse satisfecha con la información suministrada por el indicado órgano administrativo que, según ha manifestado expresamente en las alegaciones trasladadas a esta Institución, el puesto se ha vinculado tanto a la Oferta de 2006 como a la de 2007.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada frente a la Resolución del Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid de 2 de marzo 2017, al considerar que se ha realizado una aplicación correcta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda